

Aumentan a cien las medidas judiciales que se sustituyen por servicios a la comunidad

ASUNTOS SOCIALES REFUERZA LOS RECURSOS ANTE UNA MAYOR "CONFLICTIVIDAD JUVENIL"

Los ayuntamientos de Zizur Mayor y Tudela colaboran vía convenios y se prevé la entrada de Pamplona y Tafalla

ANA IBARRA



Exterior de la Granja Escuela Ilundáin, donde los menores cumplen las medidas judiciales en régimen de internamiento. FOTO: JAVIER BERGASA

PAMPLONA. El aumento del número de diligencias sobre menores infractores y, con ellas, la "conflictividad juvenil" en Navarra que puso de manifiesto en su día la Fiscalía de Menores tiene una "respuesta continuada" desde el departamento de Asuntos Sociales "en los casos que nos afectan". García Malo subrayó ayer en una comparecencia parlamentaria solicitada por el PSN que el sistema de protección al menor que se ha implantado en Navarra "funciona correctamente", tiene un alto grado de "coordinación" (intervienen servicios sociales de base, el ámbito educativo, el sanitario, el policial y el

judicial) y cuenta con una dotación de "recursos humanos y económicos suficiente". A diferencia de la situación en otros centros de menores de otras comunidades, denunciadas por el Defensor del Pueblo, en Navarra tanto el Defensor del Pueblo como la Fiscalía de Menores ponen de manifiesto el "buen trato, la adecuación de los programas y la satisfacción de las personas usuarias". La eficiencia del sistema emana del Plan de Atención a la Infancia y Adolescencia en Dificultad Social, que fue aprobado por unanimidad, y que ha sido evaluado desde el 2007, detallando a su vez una serie de recomendaciones y compromisos que serán desarrollados hasta el 2011 (Cartera de Servicios "aprobada por UPN, CDN y PSN").

Detalló que desde el Gobierno de Navarra existen programas específicos dirigidos a menores de 14 a 18 años que han cometido algún delito tipificado como tal en el Código Penal y cuyo objetivo final es lograr su adaptación social a través de diferentes medidas educativas. En este sentido, 335 menores han cumplido en el 2008 (305 en 2007) 355 tipos de medidas judiciales que exigían internamiento, para lo que el Gobierno cuenta con un centro de menores con diez plazas, y se está construyendo uno nuevo (Ilundáin) para 20 plazas.

Asimismo, en los recursos para casos delictivos en "medio abierto" (el menor puede permanecer en su domicilio) se incluye el tratamiento ambulatorio por consumo de drogas y problemas de salud mental, asistencia a centro de día, permanencia de fin de semana en centro o en domicilio, libertad vigilada, convivencia con otra persona, familia o grupo educativo; prestación de servicios en beneficio de la comunidad y realización de tareas socioeducativas. Los educadores "expertos" han aumentado hasta los once actuales. En el año 2007 se ejecutaron 283 medidas judiciales y en el 2008 sumaban 273 más otras 53 que continuaban del año anterior: 326. Las más significativas fueron las 86 por libertad vigilada, las 99 de servicios en beneficio de la comunidad (67 en 2007) -como sustitutivas de las penas y en los que colaboran las entidades locales- y las 56 tareas socioeducativas. Hasta el momento se han firmado dos convenios de colaboración con los ayuntamientos de Zizur Mayor y Tudela con trabajos a favor de la comunidad en determinados servicios públicos y con fines de interés social con el objetivo de "confrontar al menor con su propia conducta y responsabilidad de sus consecuencias". Además, se está trabajando también para llegar a acuerdos con Pamplona y Tafalla, remarcó la consejera.

ACOGIMIENTO FAMILIAR Por otro lado, un total de 387 menores fueron atendidos el año pasado en programas de acogimiento residencial. En el 2007 fueron 345 los menores atendidos mientras que en el 2003 la cifra era de 263. Dentro de este sistema de protección se incluyen los diez menores inmigrantes llegados de Canarias, que se han formado y trabajado en escuelas taller de Tafalla y Estella. También se encuadran los dos recursos COA (Centros de Observación y Acogida), uno para menores entre 0 y 12 años, y otro de 12 a 18, que suman 192 menores. Se trata de recursos transitorios para analizar la situación de los menores que llegan por diferentes motivos (violencia sexual, niños abandonados...) y que normalmente se suelen derivar a otros recursos residenciales (pisos, etcétera). La consejera detalló también otros programas como el de intervención familiar para menores de 0 a 18 años (asesoramiento y orientación) que llegó a 119 menores (111 en 2007) en 50 familias, o el centro de día con 18 plazas y 25 menores (24 en 2007). Además, 254 menores fueron acogidos en 228 familias, y hubo 32 casos (y 16 altas) de programas de educación con adolescentes con problemas de conducta.

Tras la intervención, el parlamentario socialista Javier Monzón mostró su "tranquilidad" al comprobar que lo que se dice en los informes del Defensor del Pueblo de España "nada tiene que ver con lo que pasa en Navarra". Además, mostró su apoyo para seguir "vigilantes" en el estado de los recursos, así como "en la calidad de los equipos humanos

Anuncios Google

Días H - Hoteles Pamplona

3000 hab. 3*, 4* y 5* por 20 euros
Sólo 3 Días ¡Reserva ya, Se Agotan!

lastminute.com/Hoteles_Pamplona

DESTACADOS

DATOS

Dinero. La dotación presupuestaria del Plan de Atención a la Infancia y Adolescencia en Dificultad Social se ha incrementado notablemente en los últimos años y para el 2009 se espera un aumento del 24,6% al pasar de 12,6 millones del 2008 a 15,7. Y entre 2008 y 2011 de un 39,3%. Hay 260 puestos de "alta cualificación".

Abusos sexuales. En 2008 se realizaron valoraciones en 35 familias con 48 menores "para despistaje de posibles situaciones de abuso sexual y maltrato grave". Del total de valoraciones resultaron nueve casos de abuso sexual, afectando a 13 menores. Finalmente, se trabajó con 26 casos desde la vertiente terapéutica.

LA FRASE

☞ "Tenemos que reflexionar sobre la labor educativa de los hijos en esta sociedad"

CONCHI MATEO . UPN

Desde UPN, Conchi Mateo también se felicitó por la situación en Navarra "donde existe un plan y una ley que cumplen con los derechos de los menores". Destacó además que el aumento de los delitos nos deben hacer "reflexionar sobre la sociedad que estamos creando y dónde estamos fallando porque quizá hay una incapacidad parental en la labor educativa de nuestros hijos". Nekane Pérez, de NaBai habló de "garantizar la formación continua de los profesionales" y en la "coordinación", a la vez que exigió una mayor atención de estos programas para la zona norte, y un mayor apoyo a las familias en materia de acogida. Añadió que la valoración sobre la coordinación "choca" con el informe de la Fiscalía. José Andrés Burguete, de CDN, destacó la normativa "adecuada que existe en Navarra". Por último, Ana Figueras, de IUN, propuso un protocolo de actuación entre departamentos, reivindicó mejores "condiciones económicas" para los profesionales de este sector, y abogó por mejorar el "abordaje" de salud mental del menor en general.

internet@noticiasdenavarra.com